

Intervencionismo en elecciones y virajes electorales*

Jaime Castillo Palma
UAP/SOMEE Colima 2022

La ponencia que pongo a su consideración replica la argumentación de la convocatoria al congreso de la SOMEE sobre elecciones y virajes electorales en América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Pues, si bien los convocantes distinguen los vaivenes de los virajes entre izquierda y derecha como resultado de las condiciones económicas, las desigualdades sociales, la desconfianza en las instituciones y la decepción por sus magros resultados, todavía más agravados por la pandemia, son cuestiones que aún resultan insuficientes. Se dejan de lado razones estructurales en el origen de los virajes electorales. Me refiero a las diversas formas de dominación en América Latina que afectan tanto a los procesos de democratización como a la cultura política.

En consecuencia, la pregunta central de mi ponencia se interesa, principalmente, en saber cómo es el resultado de los procesos de dominación extranjera ligados a oligarquías locales, en países con poca institucionalidad, altos niveles de corrupción e impunidad y baja calidad de la democracia. Países con muy poco margen de acción para transformar el rol determinado por la actividad extractiva, el ensamblaje, las remesas y el crimen organizado. Es decir, países cuyas economías son mayoritariamente dependientes de potencias extranjeras.

Entonces, la idea fuerza de mi ponencia sustenta que los antecedentes históricos antidemocráticos y autoritarios en América Latina y el Caribe, resultantes de golpes de Estado y dictaduras, impidieron el arribo de cualquier opción de gobierno no vinculado a los intereses de la dominación extranjera. Arribo sólo posible tras los efectos de las privatizaciones neoliberales que, a nombre de la “modernización”, consolidaron mayor dependencia y pauperización; generando movimientos sociales y políticos por mejores condiciones de vida, trabajo y de representación política, en países marcados por la anomia (ausencia de ley, degradación y desorden). Así, las formas en que la dominación extranjera se vincula a la democracia y a la cultura política han sido diversas y cambiantes: aunque desde las dictaduras militares hasta los golpes de Estado “blandos”, el fondo, ha sido el mismo.

El intervencionismo sustenta la relación entre el poder y los negocios en dos períodos de intervención extranjera diferentes, pero con propósitos similares: el primero, refiere a la corrupción instrumentada para obtener presencia en la representación cameral que asegure los intereses de las trasnacionales, cuyo efecto ha quedado manifiesto en la destitución y/o encarcelamiento de gobernantes acusados de enriquecimiento ilícito. Lo anterior también aplica contra gobernantes no alineados a los intereses trasnacionales, a quienes se encarcela o destituye mediante el golpe blando o el encarcelamiento, para evitar que contiendan en procesos electorales. El segundo período refiere a la dominación financiera característica del periodo de globalización, a través de los tratados de libre comercio que, por un lado exigen

* Este trabajo no hubiera sido posible sin la invaluable colaboración de Angelina del Carmen Flores Vargas y Alejandra Valencia Serrano quienes, bajo mi dirección, realizaron el análisis documental y los cuadros de concentración de datos en los que se basa este texto.

normalización democrática y por otro, aseguran condiciones leoninas de funcionamiento a favor de las transnacionales y en detrimento de los países independientes, manifestadas en la desestabilización política y social; otro aspecto es el intervencionismo en cuestiones de seguridad, lucha contra el narcotráfico y la migración, de creciente importancia política dada la imposición de sinnúmero de prácticas de coerción. En fin, me pregunto si en estas condiciones de dependencia y anomia ¿los virajes político-electorales y el funcionamiento de la democracia liberal podrían ser explicados sólo en el ámbito de lo que ocurre en los procesos electorales?

1. El itinerario de la dominación: dos períodos y un mismo propósito.

Un breve recuento del intervencionismo norteamericano, explicado en la frase que resume la doctrina Monroe: “América para los americanos”, (1823)¹, comienza cuando Estados Unidos, ante la amenaza expansionista rusa durante el periodo de la Guerra Fría, promulga el Acta de Seguridad Nacional (1947), que sentó las bases para la conformación del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, 1947) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, 1948)². Sobre esta triada quedó sentado el apoyo financiero y militar a países que compartieran la lucha contra el comunismo dentro de sus propias fronteras en la Ley de Seguridad Mutua (1951). Esta línea de acción impulsada durante las décadas de los años 1950, 1960 y 1970, permitió el desarrollo de información y entrenamiento a militares latinoamericanos en Estados Unidos de América (EUA). Fue desde la CIA que se realizó, por ejemplo, el plan de inteligencia Operación Cóndor (1975), aplicado en la Escuela de las Américas en Panamá, en coordinación con los servicios de inteligencia y seguridad de los regímenes militares dictatoriales de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, para aniquilar a la izquierda opositora (Romero, 2019)³.

En un primer período, centrado básicamente en el militarismo, destaca el intervencionismo en los golpes de Estado:

Paraguay: Alfredo Stroessner, 1954
Guatemala: Carlos Castillo Armas, 1954
República Dominicana: Elías Wessin, 1963
Brasil: Humberto de Alencar Castelo Branco, 1964
Argentina: Juan Carlos Onganía, 1966
Perú: Juan Velasco Alvarado, 1968
Panamá: Omar Torrijos, 1968
Bolivia: Hugo Banzer, 1971
Uruguay: Juan María Bordaberry, 1973
Chile: Augusto Pinochet, 1973
Argentina: Jorge Rafael Videla, 1976
El Salvador: Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Majano, 1979
Granada: Hudson Austin, 1983

¹ Formulada por los Estados Unidos, casi doscientos años atrás, aún posee vigencia y se expresa con frecuencia en acciones injerencistas sobre América Latina y el Caribe, toda vez que, a la fecha, le considera su área de seguridad.

² Así se establece un nuevo rol para el Estado americano, conceptualiza el término ‘seguridad nacional’ para involucrar y movilizar a militares en acciones que atenten contra su papel hegemónico en el mundo (Leal, 2003).

³ Los programas de apoyo militar hacia América Latina habían logrado ya la transferencia de la “concepción norteamericana de seguridad nacional a los ejércitos de la región” (Leal, op cit: 78), si consideramos el origen de los gobernantes que colaboraron en la operación.

Al listado anterior habría que anexar a Cuba, que ha padecido innumerables intentos para descarrilar la revolución desde los años sesenta⁴. ¿Cuál era el interés?

El interés en juego de la dominación extranjera está ligado a la explotación del petróleo, el cobre, el litio, el oro, la plata, la tierra, el agua, etcétera; al mantenimiento de las condiciones de precarización para obtener mano de obra barata y a garantizar una representación “democrática” afín a los intereses de la dominación imperialista. Cuestión inocultable en cada golpe de Estado. En Guatemala (1954), el golpe de Estado se dio “tras la reforma agraria realizada por Jacobo Arbenz que afectó a la United Fruit Company” (Ramiro y González, 2016). En Brasil (1964), el golpe de Estado contra Joao Goulart fue consecuencia de la promulgación de leyes conocidas como *Reformas Base*, mediante las cuales se ordenó la expropiación de tierras, refinerías y la nacionalización de empresas extranjeras. En Chile (1973), el golpe de estado fue apoyado por la empresa *International Telephone and Telegraph*, pues la nacionalización de las minas de cobre, hierro, salitre, telefonía y transporte, afectaron directamente a sus intereses. En Uruguay (1973), aún cuando el presidente en funciones, Juan María Bordaberry, formaba parte del grupo cívico militar apoyado por EUA, fue destituido por no detener el crecimiento del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros⁵. En Granada (1983), el golpe de Estado contra Maurice Bishop tuvo como pretexto restaurar el orden, la democracia y proteger a los ciudadanos estadounidenses residentes, pero el objetivo real fue suspender el contacto con Cuba para impedir la posible anexión de otra base cubano-soviética en la zona. En Argentina, las empresas automotrices Renault, General Motors, Mercedes Benz y Chrysler, apoyaron a la dictadura militar (1976-1983), pues se beneficiaban de la represión a la clase trabajadora (Harari, 2006). En Panamá (1989), la ocupación militar denominada ‘Operación Causa Justa’ impulsada por el Presidente Bush (padre) tuvo como objetivo mantener el control del canal interoceánico, para evitar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter y la ampliación del canal pactada entre Japón y el gobierno de Noriega (Yao, 2017).

Destaca también el interés de la dominación financiera, toda vez que los gobiernos dictatoriales, a través de juntas militares de gobierno, intentaron legitimarse mediante el crecimiento económico apoyado en el endeudamiento con la banca internacional. Fueron préstamos que, generosamente, sin límites, sin requisitos otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI)⁶. Sin embargo, una vez destituidos estos gobiernos, al cierre de la década de los años 1980, (quince países ya habían logrado salir de la dictadura) todos habían

⁴ El más reciente fue un golpe blando intentado desde noviembre de 2020 hasta el verano de 2021; concebido durante el mandato de Trump y aplicado por Biden, se realizó mediante campañas de odio generadas desde la cuenta digital #SOSCuba, ubicada en España, operada desde EUA mediante granjas de *trolls*, medios de comunicación, manifestaciones de descontento juvenil, así como la aplicación de 243 medidas adicionales a las existentes al bloqueo económico; además que se buscó impedir la compra de insumos y medicamentos contra COVID. (Guerra, 2022).

⁵ Movimiento guerrillero que adoptó el socialismo como objetivo de la revolución y la guerrilla urbana como forma de lucha. En los años 1980 fundaron partido, luego, como parte de un frente amplio, llevaron a la presidencia a Tabaré Vázquez en 2004. En 2010, José Mujica, militante fundador del movimiento y preso político durante más de catorce años, llegó a la presidencia también.

⁶ “Entre 1976 y 1982, la deuda externa argentina creció casi seis veces, pasando de 7,875 mdd corrientes a 43,674” (Jozami, 1986: 40). El periodo coincide con el gobierno de la junta militar encabezada por Rafael Videla. Jozami adjudica el crecimiento de la deuda a la compra de armamento para enfrentar el conflicto bélico con Chile, a la fuga de capitales y a los auto préstamos que se hicieron las altas esferas del poder militar. Otro caso es Chile que, durante la dictadura militar de Pinochet, incrementó cuatro veces el total de su deuda en un periodo de diez años (Vitale, 1990).

adoptado el modelo de economía de mercado (Casilda, 2004), de manera que los gobiernos electos se encontraron sin margen de maniobra y completamente a disposición de los dictados del FMI, dada la creciente deuda y el consecuente pago de intereses, frente a un descontento generalizado (Castillo, 2014).

El descontento que derivó en desestabilización política de la región se manifestó en las abruptas renunciaciones presidenciales y en los constantes cambios de gobierno, como en Argentina de Raúl Alfonsín (1989), Fernando de la Rúa (2001), Adolfo Rodríguez Saá (2001) y Eduardo Duhalde (2003); o como en Brasil, Fernando Collor de Mello (1992), o en Venezuela, Carlos Andrés Pérez (1993) y en Ecuador, Abdalá Bucaram (1997), por mencionar algunos ejemplos.

2. El segundo período del itinerario de la dominación extranjera.

Ya en el contexto del Consenso de Washington⁷, se fueron combinando el militarismo con los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI); mismos que introducen cambios en el ámbito económico y político a través de formas extremadamente ventajosas para las empresas transnacionales ligadas a las oligarquías locales:

“Principalmente durante los años 90, los países de América Latina y el Caribe firmaron cientos de tratados internacionales que protegen a la inversión extranjera y otorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, incluyendo el demandar a los Estados en tribunales internacionales cuando consideran que sus ganancias han sido afectadas de alguna manera por las acciones de los gobiernos. (...) Las demandas Inversor-Estado se han multiplicado en las últimas décadas: de un total de 6 casos conocidos bajo tratados en el año 1995, a 942 casos conocidos en 2019. De ese total, los países de América del Sur, América Central y el Caribe fueron demandados en 267 ocasiones, lo que representa un 28.3% de las demandas inversor Estado conocidas a nivel mundial” (Olivet et al, 2019:4).

Siguiendo el reporte del *Transnational Institute*, los países latinoamericanos han pagado más de 30 mil millones de dólares por demandas de las transnacionales. El país más demandado es Argentina con 62, seguido de Venezuela con 52, México con 33, Ecuador con 25 y Bolivia con 17. Por el origen de los inversores demandantes, EUA se coloca en primer lugar con 91 demandas, seguido por España con 48 y, en tercer lugar, Países Bajos (Holanda) con 28. No sorprende que en el 70% de los casos resueltos, el inversor salió beneficiado (Olivet et al, op.cit.).

De estas renovadas formas de dominación surgieron los llamados golpes de Estado blandos⁸, conocidos como *Lawfare*⁹ o *Warfare* (guerra jurídica) contra Estados opuestos al neoliberalismo y a los cuales se tilda de populistas enfrentados a la globalización. Entre los Estados que han sufrido golpes blandos destacan:

- Venezuela, intento de golpe contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro en 2014 y 2019,

⁷ Originó las medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años 1980.

⁸ Gene Sharp, sostuvo hasta su reciente muerte, que “los golpes de Estado mediante la fuerza y las armas son obsoletos” y que hoy se combate con “armas psicológicas, sociales, económicas y políticas” (Mendoza en Sánchez, 2019).

⁹ “El uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de modo que quede más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción” (Vollenweider y Romano, 2017).

- Haití, golpe a Jean-Bertrand Aristide en 2004,
- Honduras golpe a Manuel Zelaya en 2009,
- Paraguay, *lawfare* a Fernando Lugo en 2012,
- Argentina, golpe fallido contra Cristina Fernández en 2015,
- Brasil, *lawfare* a Dilma Rousseff en 2016 y a Lula da Silva en 2018,
- Ecuador, *lawfare* a Rafael Correa en 2018
- Bolivia, golpe a Evo Morales en 2019

El golpe blando es resultado de una estrategia de guerra no convencional, cuyo propósito es implementar acciones de desestabilización y persecución política. Ha sido promovido por la Agencia de EUA para el Desarrollo Internacional (USAID, 1961) brazo civil del intervencionismo político y militar, también a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como la *Atlas Network*¹⁰, patrocinada por *Exxon Mobil* y *Philip Morris*, vinculada al Departamento de Estado y de organizaciones como la anticomunista *National Endowment for Democracy*, (1983)¹¹, el Instituto CATO (patrocinado por Industrias Koch, 1977) y su filial: *Students for Liberty* (2008)¹².

3. El intervencionismo en la representación democrática y la soberanía.

Como antes hemos descrito: 1) la democracia en Latinoamérica se ha constreñido al interés dominante de la intervención financiera, política, económica y militar de los Estados Unidos; 2) consecuentemente, al requerirse mínimos de observancia democrática en los acuerdos y tratados internacionales de libre comercio se improvisaron y simulaban procesos político electorales de supuesta equidad e integridad, mismos que a la fecha perduran (pues no había competencia electoral debido al predominio de partidos hegemónicos); 3) En fin, la supuesta preocupación por la democracia es para la dominación extranjera, una forma de garantizar que la representación democrática en los países latinoamericanos sea afín al libre mercado globalizado y a los intereses que de ahí emanan.

La presencia militar ha sido otra de las formas de injerencia de EUA en las soberanías latinoamericanas y del Caribe, siempre justificada con la defensa de valores como la justicia, la igualdad y la libertad, para ocultar su verdadero interés de extender y mantener su dominio. Boaventura de Sousa (TV UNAM, 2019) sintetiza esta presencia militar para “destruir enemigos, para crear golpes blandos y crear democracias amigas de Estados Unidos” en cuatro guerras inventadas: contra el comunismo, contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra la corrupción. Bajo la misma óptica, Froylán Enciso (2019), en su reseña sobre *US Military Bases in Latin America* (Bitar, 2016) se pregunta “¿Cómo llegamos a este momento

¹⁰ *Atlas Network*, (antes Fundación de Investigación Económica Atlas) es una ONG, con sede en EUA, cuyo objetivo es promover políticas económicas de libre mercado en todo el mundo. En Latinoamérica, sus cuadros, liberales en economía y ultraconservadores, en política regional, acompañaron varios procesos de golpes de estado en la región.

¹¹ La NED, por sus siglas en inglés, ha sido desde su creación, en 1983, una institución multifacética, que es un centro de actividad, recursos e intercambio intelectual para activistas, practicantes y estudiosos de la “democracia” en todo el mundo: <https://www.ned.org/about/acerca-de-ned/>

¹² Fundada en 2008, tiene presencia en 22 países de Latinoamérica. Su principal directivo es Alexander McCobin, quien proviene del CATO; una de sus aliadas más visibles es la conferencista guatemalteca Gloria Álvarez, coautora del libro *El engaño populista*, proyecto para el cual tuvo apoyo de Enrique Krauze y Mario Vargas Llosa, también relacionados con el CATO: <https://studentsforliberty.org/eslibertad/>

en el que la presencia militar de Estados Unidos en América Latina se justifica mediante el combate a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo?” y halla respuesta cuando Bitar vincula la construcción de bases militares por el gobierno de EUA en Latinoamérica durante grandes momentos históricos, con el objetivo de tener presencia ante movimientos potencialmente conflictivos y estratégicos para su política exterior”.

Dos aspectos destacan en la dominación extranjera por su intromisión en la representación democrática de los Estados latinoamericanos y en cuanto a su soberanía nacional. El primero refiere a casos de sobornos y financiamiento ilegal de campañas electorales a cambio de contratos en obras y servicios públicos, cuyo interés soterrado, a nombre de la guerra contra la corrupción, deviene en apoyo a la opción política que conviene al interés del libre mercado y en caso de conflicto, a su uso político por parte de las autoridades de EUA. Algunos ejemplos de este aspecto han sido ampliamente conocidos:

- **Odebrecht:** El Departamento de Justicia de EUA, señaló redes de corrupción de Odebrecht durante el periodo 2001-2016, tiempo en el que fueron repartidos poco más de 788 mdd (439 mdd fuera de Brasil) en sobornos en 12 países, diez de América latina¹³:
 - **Argentina:** 35 mdd por sobornos entregados entre 2007 y 2014, no ha concluido investigaciones y no se han aplicado condenas, al menos hasta julio de 2022. <https://bit.ly/3d8ngeI>. Los imputados se acogieron a la llamada “delación premiada” y luego de un corto período fueron excarcelados para seguir su proceso en libertad.
 - **Brasil:** 439 mdd repartidos entre 2001 y 2016. Luiz Inácio Lula Da Silva fue el primer expresidente acusado por delito común vinculado a Odebrecht, fue encarcelado como una sanción penal definida en una condena rápidamente asignada, lo que llevó a sospechar que, en realidad, se pretendía evitar su candidatura a la presidencia, dado que fue exonerado y liberado varios meses después. Michel Temer fue el segundo expresidente de Brasil detenido por similares causas, aunque se trató de una detención preventiva, que no ameritó que pisara la cárcel (O’Globo, 2019) <http://glo.bo/3xooERB>
 - **Colombia:** 11mdd (2009-2014). Se han obtenido 18 condenas (15 contra particulares y 3 contra servidores públicos) <https://bit.ly/3dbQyJu>. Se trata del soborno recibido por el exviceministro y expresidente de Transporte, Gabriel García Morales, Director del Instituto Nacional de concesiones (INCO) por la concesión de la Ruta del Sol. Estuvo involucrado el ex senador Otto Bula al que se condeno a 2 años de prisión¹⁴. Parte del soborno, según Bula, fue entregado a Andres Giraldo enlace de Roberto Prieto coordinador de la campaña del presidente Santos para su reelección en el 2014, Sin embargo, no fue el único señalado pues Odebrecht habría pagado la asesoría del consultor brasileño Duda Mendoza, a Ivan Zuluaga candidato derrotado en las elecciones presidenciales del 2014. <https://bit.ly/3yrHEyR>
 - **República Dominicana:** 92 mdd (2001-2014): 18 contratos para la ejecución de obras públicas por un monto de 4,540 mdd en 12 años, de los gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), Leonel Fernández (2004-2012) y Danilo Medina (2012-2020), se estimaron sobrecostos por 1,951 mdd. Se sanciona a los responsables con 184 mdd, el doble de los sobornos. <https://bit.ly/3TJONDS>
 - **Ecuador:** 33.5 mdd (2007-2016): Mauricio Funes (presidente, 2009-2014), Odebrecht

¹³ Cfr. : Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Este de Nueva York (2016). Comunicado de prensa del Acuerdo de declaración de Odebrecht. <https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919916/download>

¹⁴ Otro de los implicados, el Auditor del proyecto Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizzano, un testigo clave murió en extrañas circunstancias.

financió ilegalmente al asesor brasileño Joao Santana con 1.5mdd para la campaña de Funes <https://bbc.in/3Rln9LE>; Jorge Glas (vicepresidente, 2013-2018), sentenciado a seis años de prisión culpable de asociación ilícita en el caso Odebrecht cuando era Coordinador de Sectores Estratégicos (2010-2012), recibió 13.5mdd <https://bit.ly/3Rp0P3V>

- **Guatemala:** 8 mdd. (2013-2015). Manuel Baldizón, candidato presidencial en 2015 es acusado de haber recibido 3mdd de Odebrecht para su campaña electoral. Alejandro Sinibaldi, ministro de comunicaciones e infraestructura del presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y también candidato presidencial (2015), recibió 17.9mdd por la concesión de la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de un tramo de la ruta CA 2 Occidente quien actualmente está prófugo. <https://bit.ly/2VoHVND>
- **México:** 10.5 mdd entregados de 2010 a 2014. A la fecha, Emilio Lozoya Austin, Director de PEMEX de 2012 a 2016 es el único que permanece en prisión preventiva luego de ser acusado por recibir 4.5 mdd durante el Gobierno de Felipe Calderón, siendo entonces coordinador internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, luego ya durante la gestión de Peña Nieto sumó 6.5 mdd más. Lozoya fue detenido en España y extraditado a México por cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa; además de los actos de corrupción por haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht a través de su filial Braskem, para la asignación de contratos públicos. <https://bit.ly/3QkM2WL>
- **Panamá:** 59mdd (2010-2014). El gobierno del presidente Carlos Varela dio su total apoyo a las investigaciones y hacia finales de 2016 no había ninguna condena al respecto <https://bit.ly/3DS1sPH>. En 2022, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá solicitó enviar a juicio al expresidente Varela, también vicepresidente (2008-2014) del expresidente Ricardo Martinelli, igualmente por haber reconocido haber recibido dinero de Obbredecht para financiar la campaña electoral del 2009, pero no mientras fue presidente del país. <https://bit.ly/3RqP5Nn>
- **Perú:** 29mdd (2005-2014): Alejandro Toledo Manrique (presidente, 1985-1990 y 2001-2006), encarcelado en julio 2019 y en libertad bajo fianza en marzo 2020, por haber recibido 20mdd por favorecer a la Empresa Odebrecht en la concesión de los tramos II y III de la Ruta interoceánica Brasil-Perú; Alan García Pérez (presidente, 2006-2011) se suicidó (17/abril/2019), en el contexto de su acusación por soborno de 7.5mdd de Odebrecht para concesionar la construcción de la Línea 1 de Metro para Lima <https://bit.ly/2BHyQqr>; Ollanta Humala Tasso, (presidente, 2011-2016), estuvo 18 meses en prisión preventiva, revocada en 2017, por haber recibido 3mdd para su campaña electoral presidencial <https://bit.ly/3r7Dg47>; Pedro Pablo Kuczynski, (presidente, 2016-2018) renunció al cargo en marzo de 2018, tuvo arresto domiciliario en 2019 y, en 2022, libertad condicionada. Favoreció a Odebrecht cuando era presidente del Consejo de Ministros, 2005-2006, al adjudicarle a la empresa la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. Señalan pagos por 4.8mdd. <https://bit.ly/2BHyQqr>
- **Venezuela:** 98mdd (2006-2015). Involucra a los presidentes electos (Hugo Chávez y Nicolás Maduro) y a su opositor, Henrique Capriles, los cuales sólo fueron señalados en los medios en el contexto del acoso permanente de EUA que, además, incluyeron embargos, sanciones y descalificaciones mediáticas no solo referentes al caso Odebrecht.
- **Obrascón Huarte Lain (OHL):** La constructora española que durante el periodo que va del año 2002 al año 2017, recibió del gobierno del Estado de México concesiones y

grandes proyectos en coincidencia con el calendario electoral de dicha entidad, ha sido señalada por haber financiado no sólo la campaña negra en contra del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también las campañas electorales para gobernador de los priistas Enrique Peña Nieto (2005-2011), Eruviel Ávila Villegas (2011-2017) y Alfredo del Mazo Maza (2017-2023) a cambio de contratos y concesiones (Flores, 2019).

- **Siemens.** Transnacional alemana demandada por cohechos por 1,400 mdd en diversos países en el mundo, entre estos Argentina (106 mdd, 1998 a 2004), México (2.5 mdd en 2004) y Venezuela (18.78 mdd, 2001-2007) perpetrados en el periodo de 1996 a 2007 (Ocando, 2013).
- **Pride International Inc.** El caso de la empresa arrendadora de plataformas y equipos de perforación de pozos petroleros, con sede en Houston, inició tras la publicación de los resultados de investigación por parte de autoridades estadounidenses a la transnacional en el año 2009. Luego, vino la admisión de culpa por sobornos realizados a funcionarios de países latinoamericanos, entre 2002 y 2007, a cambio de contratos con PEMEX por renta de plataformas en condiciones chatarra (Pérez, 2011). Los contratos con *Pride*, en México, comenzaron durante el sexenio de Vicente Fox, incrementaron durante el de Felipe Calderón e incluso, alcanzaron a beneficiarse durante el mandato de Enrique Peña; quien, por decreto, perdonó el pago de casi 2 mil mdp por impuestos derivados de los contratos otorgados por sus antecesores a la transnacional (Olmos, 2020).

El segundo aspecto refiere a los acuerdos con EUA para enfrentar la guerra contra el narcotráfico mediante apoyo con pertrechos militares y servicios de inteligencia, a cambio del acceso irrestricto a los sistemas de seguridad nacional que suelen ser usados de manera discrecional y unilateral en detrimento de la soberanía nacional.

Respecto a la Guerra contra el Narcotráfico en América Latina, cabe destacar que, incluso antes de la implementación del Plan Colombia y de la Iniciativa Mérida, los recursos provenientes del narcotráfico sirvieron, paradójicamente, para solventar apoyos financieros del intervencionismo estadounidense. Es el caso de la venta ilegal de armas a Irán (Irangate, 1985-1986), por un monto de 47 mdd, obtenidos de la droga de los cárteles mexicanos y, para financiar la intervención militar de la guerrilla de los “Contras” en Nicaragua, (1979-1990) con la intención de derrocar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional¹⁵.

El Plan Colombia (1999) fue un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos (Andrés Pastrana y William Clinton) con la intención de revitalizar la economía, terminar el conflicto armado y crear una estrategia contra el narcotráfico. Sin embargo, el narcotráfico con el Plan Colombia no desapareció, sino que se transformó. Si bien, la intervención de EUA debilitó a las FARC¹⁶ también les alejó de un acuerdo de desmovilización, alcanzado hasta el año 2017, al final del período del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018). La aspersión con el cancerígeno glifosato para erradicar los plantíos de coca causó problemas de salud y no funcionó; aumentaron los sembradíos de coca en 30.4%; creció la minería ilegal y fueron financiados grupos insurgentes; militares y

¹⁵ El Congreso estadounidense había prohibido a organizaciones gubernamentales financiar las actividades de la “contra” nicaragüense. Pero funcionarios del gobierno de Reagan, incluyendo al coronel North, recurrieron al Consejo Nacional de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés), que no se mencionaba explícitamente en la ley elaborada por el Congreso, para recaudar fondos para la guerrilla (BBC, s/f).

¹⁶ Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP).

paramilitares (desmovilizados entre 2003 y 2006) se convirtieron en mercenarios debido a los falsos positivos¹⁷ y, de las 9.3 millones de personas registradas en la Unidad de Víctimas, más de 80% denunció que su situación tuvo lugar durante los años del Plan Colombia¹⁸. En fin, a pesar del dinero invertido desde el año 2000 (120 mil mdd para Colombia y de 10 mil mdd para EUA), los cárteles del narcotráfico se fragmentaron haciendo más difícil su erradicación y la violencia se trasladó hacia México (Cosoy, 2016) y luego a Centroamérica.

La Iniciativa Mérida (2008), similar al Plan Colombia, fue promovida por los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón, como un tratado internacional entre EUA, México y Centroamérica para combatir al narcotráfico y al crimen organizado. El Congreso estadounidense aprobó un paquete de 1,600 mdd para tres años de operación, en tanto México se comprometió a aportar más de 8,000 mdd. A la conclusión del mandato de Felipe Calderón, en el año 2012, los niveles de corrupción e impunidad que, por supuesto, se incluyen como efectos de la Iniciativa Mérida acrecentaron las causas sociales de la violencia y, pese a lo fallido de la estrategia, la iniciativa fue ratificada por los gobiernos de Barack Obama y Enrique Peña Nieto, no obstante, los 250 mil muertos, 40 mil desaparecidos y más de 30,000 desplazados. Cauda de homicidios dolosos que hasta fecha sigue creciendo.

Como parte de la fallida iniciativa Mérida, entre los años 2009 y 2011, se implementó la operación estadounidense *Rápido y Furioso*, originada en el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (conocida con detalle a través de *WikiLeaks*) por la que se permitió el tráfico de 2,500 armas con chips de rastreo para infiltrar entre los cárteles del crimen organizado. Si bien la operación cumplió el objetivo de llegar a grupos criminales, también es cierto que dejó asesinatos, descubrió redes de corrupción, irregularidades en los procesos de investigación relacionados con crímenes cometidos con las armas, y órdenes de aprehensión, por presunta participación en el ingreso ilegal de armas al país, para el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas y cuatro exfuncionarios más de la Policía Federal. Para 2019 EUA se aleja del caso, la FGR lo retoma y en mayo de 2020 el Canciller Ebrard declara en twitter:

“Si en efecto, el gobierno de México conoció y autorizó el operativo, entonces estaríamos hablando de graves violaciones a la Constitución Política y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en el país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y la sociedad.”¹⁹

La Iniciativa Mérida se mantuvo vigente hasta el año 2021, aunque desde el inicio de su gestión, el presidente López Obrador había sido “tajante en su propuesta de eliminar por completo la Iniciativa Mérida” cuando esta fue cancelada se logró desmontar “uno de los chantajes más socorridos y reiterativos del expresidente Trump: cancelar los fondos que Estados Unidos entrega cada año a dicho plan, cuando la realidad es que Washington lo ha hecho para favorecer sus propios intereses” (Prensa Latina, 2019).

En marzo de 2018, el Comando Sur Norteamericano, hizo pública su estrategia. Entre estos

¹⁷ Civiles abatidos que, tanto paramilitares como militares, hicieron pasar por guerrilleros para obtener un bono promovido durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010).

¹⁸ Cifra actualizada según datos presentados en el portal Unidad para las Víctimas de Colombia. Disponible en <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>

¹⁹ Cfr. En “Tráfico de armas y funcionarios de alto perfil involucrados: ¿qué fue el operativo ‘Rápido y furioso’? en Milenio Digital, 22 de enero de 2022. Disponible en: <https://www.milenio.com/policia/operacion-rapido-furioso-que-es-y-para-que-sirvio>

intereses destaca la cobertura que la Iniciativa Mérida le dio al uso político de la información recabada mediante el acceso irrestricto de agentes de la CIA y la DEA al territorio nacional y al Sistema de Seguridad Nacional de México. Nos referimos también a las detenciones y extradiciones de capos de cárteles y a las de funcionarios de alto rango de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto (incluida la breve retención en EUA del General Salvador Cienfuegos, Ex Secretario de la Defensa Nacional, en octubre de 2020), acusados de participar en el mega rentable negocio del crimen organizado, que a estas alturas ha penetrado en el sistema político y en todos los niveles y poderes del gobierno de México.

En marzo de 2018, el Comando Sur Norteamericano, hizo pública su estrategia para Latinoamérica y el Caribe, para los próximos diez años, señalando los principales “peligros” o “amenazas” identificadas y el modo de enfrentarlas. Así, se mencionó a Cuba, Venezuela y Bolivia, “la lucha contra el narcotráfico”, las redes ilícitas regionales y transnacionales y la mayor presencia de China, Rusia e Irán en América Latina y el Caribe, igualmente, fue asignado el papel de las fuerzas de seguridad interna, regional e internacional.

Cabe mencionar que, en América Latina y el Caribe, se encuentran 76 bases militares norteamericanas: Panamá (12), Colombia (9), Perú (8), Honduras (3), México (3, durante la aplicación del Plan Mérida), Paraguay (2), Argentina (2), Guantánamo (1), Ecuador (1). Estas bases militares también funcionan como centros para la guerra mediática y la ciberguerra.

Colombia (país que seguramente después del triunfo de Gustavo Petro reconsiderará) y más recientemente Perú son actores clave del despliegue militar estadounidense en la región con la instalación de bases en la selva peruana y los Centros de Operaciones de Emergencia Regional. Igualmente, durante el mandato de Lenin Moreno (2017-2021) en Ecuador, fue reabierta la base militar en el aeropuerto de Manta, en las islas Galápagos, prohibida constitucionalmente desde 1999 (Fernández, 2018). Datos relevantes de su uso dan cuenta, a principios de enero del 2018, de la llegada de personal militar estadounidense a territorio panameño, fuerza militar que debía permanecer hasta después de las elecciones de Venezuela en abril. La excusa: la defensa del Canal de Panamá. Otro ejemplo que levanta más dudas que certezas es la construcción de una base de ayuda humanitaria en la zona en donde se ubica la segunda reserva mundial de gas no convencional (Vaca Muerta, declarada en 2011) en Argentina (FARN, 2019 y Fernández, op.cit.)²⁰

4. Los virajes político electorales en su contexto.

Una aproximación somera del interés soterrado del intervencionismo que deviene en golpe blando y/o viraje electoral implica la participación de diversos actores entre los cuales destacan: aquellos que económicamente están disputando intereses de la índole que sea; los que están en la representación del poder ejecutivo, legislativo y judicial a favor o en contra de tales intereses; los que representan intereses oligárquicos locales y los poderes fácticos, tanto en los medios de comunicación, como en el arbitraje electoral externo e interno, etc.; y los movimientos sociales a favor y en contra. Mostramos algunos casos representativos de

²⁰ El Comando Sur trabaja en conjunto con la NASA, la Agencia de Inteligencia Geoespacial y las Fuerzas Armadas brasileñas –y de otros países– en un proyecto para la creación de un satélite para la *South Cyber-Container Initiative*: análisis de redes para detectar actividades maliciosas en la red. Desarrollado en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Defensa y el Buró Federal de Investigaciones (FBI)

los intereses en juego en los virajes político electorales y las afectaciones acarreadas por el intervencionismo.

Honduras. El viraje hacia la derecha y luego a la izquierda, inicia con el golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya en 2009. Golpe centrado en el interés de la oposición oligárquica²¹, los mandos militares, prominentes actores del Congreso Nacional y la Corte Suprema en contra del ingreso del país a PetroCaribe, a la organización regional Alianza Bolivariana (ALBA) y contra la incorporación de una cuarta urna en las elecciones de 2009, de consulta no vinculante, sobre la realización de una asamblea constituyente. Horas antes de iniciar el proceso, el 28 de junio de 2009, el ejército irrumpió en la casa del presidente Zelaya para expatriarlo con destino a Costa Rica (Sáenz y Valenciano, 2019). Según documentos filtrados por *WikiLeaks*, el ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, colaboró con los golpistas (Volonté, 2012). En el contexto de la crisis posterior al golpe, durante los dos gobiernos que le suceden, se radicaliza el modelo neoliberal, pues son otorgadas concesiones territoriales costeras, mineras, de servicios públicos y construidas ciudades modelo, etc.; generando múltiples protestas y movimientos sociales de etnias como los de la OFRANEH (organización Fraternal Negra Hondureña) y populares como los del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Al mismo tiempo, la violencia producida por el narcotráfico y el crimen organizado incrementaron hasta colocar a Honduras como el país más violento del planeta. Durante los mandatos presidenciales de Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022) –paradójicamente, ya reelegido pese a que esgrimió la no reelección como motivo del golpe contra Zelaya– destacan acusaciones de corrupción, el asesinato de Berta Cáceres en 2016, dirigente de la etnia Lenca opositora a la hidroeléctrica Agua Zarca a cargo de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos)²²; las enormes caravanas de miles de migrantes en 2018 hacia EUA; así como la solicitud del gobierno de EUA para extraditar al ahora expresidente Orlando Hernández acusado de narcotráfico²³. En tal contexto de protestas, movilizaciones, una gran masa de agraviados y ante el desprestigio del Partido Nacional y el Partido Liberal, se da el viraje a la izquierda con el triunfo de Xiomara Castro²⁴, quien dio al nuevo partido Libertad y Refundación (Libre) –fundado por ella y Manuel Zelaya– el triunfo con más de 14% de ventaja, respecto a su más cercano competidor.

Paraguay. El viraje a la derecha a partir de la destitución del Presidente Fernando Lugo en 2012, sin existir ninguna causa valedera ni jurídica ni política para su salida, está relacionado “con los intereses de grupos económicos y mediáticos de dentro y fuera del país involucrados con las multinacionales Cargill, Dreyfuss, ADM, Monsanto y otras del agronegocio exportador ante la remota posibilidad de una reforma agraria” (Estrada, 2018). Sin embargo, de mayor importancia resultaba la destitución de quien interrumpió, luego de ganar las elecciones en

²¹ La oligarquía hondureña tiene su identidad social en la FENAGH (Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras), se trata de terratenientes que, junto con empresarios, militares, dirigentes sindicales y algunos intelectuales conservadores, en 1983 fundaron la APROH (Asociación para el Progreso de Honduras). Su objetivo era legitimar el modelo neoliberal, la estrategia de seguridad nacional y la consiguiente represión contra los movimientos sociales, moviéndose como un gobierno paralelo en la sombra.

²² Tuvieron que pasar seis años para que uno de los autores intelectuales del asesinato, ex directivo de DESA y ex oficial de inteligencia del ejército, fuera condenado a 22 años de prisión (BBC, 2022).

²³ Tras declaraciones de un socio del expresidente Orlando Hernández, según el gobierno estadounidense, en el tráfico de drogas, se ha llegado a calificar al de Honduras como un “narcoestado” (Sedano 2022).

²⁴ Cfr. <https://resultadosgenerales202.cne.hn:8080/#resultados/PRE/HN>.

2008, sesenta años de gobierno del Partido Colorado (incluyendo los 35 años de la dictadura de Stroessner); y quien, además, pretendía la integración regional del país al MERCOSUR, UNASUR y a la CELAC²⁵. El pretexto de la destitución fue el sangriento enfrentamiento entre policías y campesinos durante el desalojo de una propiedad rural del noreste del país, el 15 de junio de 2012, asunto retomado por la Cámara de Diputados (de mayoría opositora) para aprobar un juicio político que se envió a la Cámara de Senadores. Al día siguiente, el Senado procedió a ordenar la destitución de Fernando Lugo por “mal desempeño en sus funciones”. Luego, en esa misma sesión, dio el cargo al Vicepresidente Federico Franco. Según cable publicado en *WikiLeaks*, el gobierno de EUA sabía de la intención de enjuiciar a Lugo desde el 28 de marzo de 2009, sabía también que la maniobra estaba conducida por el líder del partido UNACE (Unión Nacional de Ciudadanos Éticos), el general Lino Oviedo y el expresidente Nicanor Duarte Frutos (Ecured, 2019). De modo que el viraje del gobierno progresista hacia la derecha se consumó mediante un golpe blando.

Bolivia. El viraje a la derecha suscitado con el golpe de Estado a Evo Morales en 2019, muestra varios intereses en juego con el mismo propósito para deshacerse de un rival político de prominencia indígena proveniente de movimientos sociales popularmente conocidos como: *la guerra del gas*, en referencia a la Masacre de Octubre, conocida por las más de 80 personas asesinadas por militares en represión de masivas movilizaciones opositoras a la exportación del gas boliviano pese al déficit padecido en el país; *la guerra del agua*, para impedir privatización del abastecimiento de agua potable en beneficio de las compañías estadounidenses Bechtel, Edison, la española Abengoa y las bolivianas Petrovich y Doria Medina) y; *la defensa del gremio cocalero*, contra las políticas de erradicación forzada de los cultivos de coca, a petición de EUA e impulsada por el presidente Hugo Banzer Suárez. A lo anterior se agregan buenos resultados de sus dos gestiones gubernamentales en políticas públicas y sus altos índices de votación obtenidos en las contiendas electorales de los años 2006 (54%), 2009 (64.22%) y 2014 (63.36%), siendo la cuarta postulación para contender en las elecciones de 2019 el motivo de conflicto (Aguilar, 2021). Evo Morales llevó su candidatura a una cuarta elección; misma que al ser descalificada por la Organización de Estados Americanos (OEA) se tornó pretexto para justificar el golpe de Estado, pues detrás del interés de impedir un cuarto periodo de gobierno, estaba la posibilidad de que compañías de Alemania y China, antes que de EUA, se convirtieran en socio estratégico para la explotación de litio (Sánchez, 2019). De aquí el apresuramiento de la oligarquía y sus adversarios políticos en el Congreso, ello también explicaría el intervencionismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su rol de observador electoral, al declarar ilegal el resultado que daba ventaja a Evo Morales, dándose entonces un emplazamiento a los líderes del ejército para “sugerirle” renunciar, concretándose el golpe con la ilegal toma de posesión presidencial de la senadora opositora, Jeanine Áñez (Ramírez-Rojas, 2021). La represión en contra de las bases sociales no pudo contra la resiliencia de cocaleros, mineros, campesinos y masas populares agraviadas que lograron revertir el golpe de Estado haciendo posible el triunfo del candidato del MAS Luis Arce Catacora en las elecciones de 2020, con un porcentaje de votación de 55.11% en primera vuelta, haciendo posible el viraje a la izquierda a pesar del intervencionismo.

México. Sus virajes político electorales son resultado del proceso que pasa por el agotamiento del partido hegemónico PRI (expresado en los asesinatos de su candidato presidencial y su

²⁵ Integración regional de Paraguay al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y a la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

Secretario General en 1994), sigue con una crisis económica, como punto culminante del primer descarrilamiento neoliberal, conocida popularmente como efecto tequila²⁶; eventos posteriores a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y al levantamiento Neozapatista, mismos que, sumados dieron paso a la primera alternancia durante dos periodos consecutivos al PAN (2000-2012). A este periodo siguió el *retour en force* del PRI (2012-2018), que volvió para promover el Pacto por México, cuyas fallidas reformas estructurales condujeron al segundo descarrilamiento neoliberal, origen en 2018, del viraje en favor de un heterogéneo movimiento de centro izquierda conformado como partido político: MORENA. A este conflictivo e intenso periodo de tres décadas de privatizaciones y reformas constitucionales le caracterizan: Por un lado, la corrupción sustentada en la creciente intervención de grandes empresas transnacionales en obras y servicios públicos a través de sobornos. Por otro lado, la vinculación entre poder político y negocios inherente al interés de apoyar el libre mercado, han sido origen de fraudes electorales. Así referimos la cuestionada caída del sistema del cómputo electoral del año 1988, que favorecía al movimiento de oposición al PRI, o la controvertida e ilegítima elección del panista Felipe Calderón, en 2006, cuyo medio punto porcentual de ventaja, provocó la búsqueda de legitimidad en la declaración de guerra contra los carteles del narcotráfico (de sangrientas consecuencias que aún perduran); además, está el fraude electoral tras la victoria del PRI en 2012, que ante el desprestigio panista, se impone mediante la masiva compra y coacción del voto (a través de la repartición de tarjetas bancarias mediante los usuales mecanismos clientelares, corporativos y de financiamiento ilegal). Si a lo anterior se agregan los efectos negativos de las reformas estructurales del Pacto por México (laborales, financieros, energéticos, educativos y fiscales) que favorecieron aún más al libre mercado²⁷ delimitamos entonces, el contexto de desprestigio político y social de enorme descontento de una mayoría de agraviados, en una escena política nacional de creciente polarización, en la que Andrés Manuel López Obrador (MORENA), logra el viraje electoral hacia la izquierda, en 2018, con 53.19% de la votación.

A manera de conclusión...

El papel que juega la democracia al servicio de la dominación extranjera ha devenido más en una práctica para la contención de los movimientos sociales que en un referente de participación, representación y equidad electoral. Hoy tenemos partidos que funcionan como franquicias y procesos electorales de nulo contenido ideológico y programático. Estos procesos electorales dependientes de la mercadotecnia electoral, de los medios masivos de comunicación y de las relaciones entre poder y negocios inducida por el intervencionismo y la oligarquía vinculada a sus propósitos, también da cobijo a los grupos de interés, a los poderes fácticos e incluso, a los cárteles del narcotráfico que, mediante plata o plomo, también han conseguido representación electoral. De ahí que:

- 1) los virajes electorales en Latinoamérica denotan votaciones polarizadas, a veces cerradas y otras con votación contundente y mayoría cameral. Posterior a esto, se logre o no la mayoría cameral, inicia el *lawfare* contra el triunfador de las elecciones.

²⁶ Devaluación del peso mexicano (1994) ocasionada por la falta de reservas internacionales, enfrentada con créditos otorgados por FMI, EUA, Canadá y países latinoamericanos afectados, así como el uso de recursos públicos, FOBAPROA (1995) para rescatar a los bancos privatizados

²⁷ <https://www.forbes.com.mx/reformas-estructurales-han-tenido-un-impacto-negativo-empresarios/>

Cuestión que puede comprobarse consultando los resultados de las votaciones que le han dado el triunfo a opositores al neoliberalismo. Sin embargo, faltaría revisar qué sucede cuando existe segunda vuelta electoral; analizar si los virajes abruptos con votación volátil llevarían a concluir que no hay construcción de ciudadanía sino electores agraviados por malas condiciones de vida, desempleo y prácticas de amedrentamiento por cárteles, caciques y guardias blancas con apoyo económico ilegal de las transnacionales afectadas por el viraje.

- 2) los virajes electorales están relacionados con los altos índices de corrupción, noticias falsas, campañas electorales de guerra sucia, clientelismo político electoral, compra y coacción del voto, violación a los topes de campaña, uso de recursos ilegales provenientes de empresas nacionales y transnacionales, así como la manipulación de los árbitros electorales ante la preeminencia de los partidos políticos en su designación.
- 3) estos virajes electorales también están relacionados con el desgaste de las alianzas electorales, que al no estar sustentadas ni programáticamente, ni ideológicamente terminan siendo un intercambio de apoyo económico, logístico y simbólico entre los partidos políticos que las conforman.
- 4) los virajes electorales también resultan del *lawfare* aunque, paradójicamente sus efectos también impulsan la votación en contra de los operantes del golpe blando.
- 5) Habría que preguntarse en dónde reside la fuerza del voto opositor de neoliberales y anti neoliberales y en dónde su mayor debilidad, si en términos de cultura política suelen ser constantes, en cualquier facción, las prácticas político electorales como el clientelismo, las cuotas, la simulación, la guerra sucia, el transfuguismo, la relación entre poder y negocio, las reelecciones sucesivas en los diferentes poderes de gobierno, la manipulación del arbitraje electoral constituido por cuotas y la creciente corrupción que permite se adapte de mejor manera el intervencionismo para asegurar la dominación.
- 6) En fin, el predominio acordado a la democracia procedimental en el análisis no puede hacer a un lado los nefastos efectos del intervencionismo de la dominación extranjera mediante la corrupción y el control financiero, toda vez que este predominio funciona como la gota de aceite lubricante para inhibir cualquier opción de gobierno que se interponga a la ideología del libre mercado, bajo el que se oculta el interés geopolítico de los países hegemónicos.

Referencias.

- Aguilar, W. (2021) Repostulación: Evo Morales y el aval del TCP para dos reelecciones en Los tiempos no se detiene. Publicado el 15 de agosto de 2021. Recuperado en <https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210815/repostulacion-evo-morales-aval-del-tcp-dos-reelecciones>
- BBC (s/f). Corrupción, seis casos emblemáticos en BBC Mundo.com. Recuperado en: http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1555_corrupcion/page2.shtml
- Canal seisdejulio (2019). En nombre de la libertad, 4ª Transformación y ultraderecha (documental). isponible en <https://www.youtube.com/watch?v=zgtEiz-S8wc>
- Casilda, Ramón. (2004). *América Latina y el consenso de Washington*. Boletín económico de ICE, información comercial española ISSN 0214-8307, N° 2803, págs. 19-38.
- Castillo, Jaime. (2014) *¿Integridad y equidad en las prácticas culturales político electorales?* XXV Congreso Internacional SOMEE: Integridad y Equidad Electoral en América Latina. Costa Rica, noviembre de 2014.
- (2016) *La relación entre el poder político y los negocios: origen de la perversión de la política y la democracia*. XXVII Congreso Nacional de Estudios Electorales. El nuevo mapa electoral de México. SOMEE, Guanajuato, 14-16 de noviembre de 2016.
- Cosoy, Natalio. (2016) *7 consecuencias negativas del Plan Colombia que quizás no conoces* en BBC Mundo. 4 de febrero de 2016. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160201_colombia_plan_colombia_15_aniversario_consecuencias_inesperadas_nc
- Ecured *Crisis política en Paraguay de 2012*. EcuRed contributors, 2 de agosto de 2019. Disponible en https://www.ecured.cu/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Paraguay_de_2012
- Enciso, Froylán (2019). *Bases militares estadounidenses en América Latina*, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva Época, Año lxiv, núm. 235, enero-abril de 2019, pp. 625-630, ISSN-2448-492X. Recuperado en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182019000100625
- Estrada, Paola. (2018) *Fernando Lugo: "El golpe de Paraguay fue contra la integración de América Latina"* en Brasil de Fato, 26 de junio de 2018. Disponible en: <https://www.brasildefato.com.br/2018/06/26/fernando-lugo-el-golpe-de-paraguay-fue-contra-la-integracion-de-america-latina/>
- FARN, Fundación ambiente y Recursos naturales. (2019) “Base de ayuda humanitaria en Neuquén, más dudas que certezas” Comunicado del 28 de mayo de 2019. Disponible en <https://farn.org.ar/base-de-ayuda-humanitaria-en-neuquen-mas-dudas-que-certezas/>
- Fernández, Raúl (2018). *Las bases militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe*. (Granma, 9-8-18), disponible en <https://debateplural.com/inicio/2021/12/20/bases-militares-de-ee-uu-en-america-latina-y-el-caribe/>
- Flores, Efrén (2019) “Concesiones a cambio de dinero para campañas. Así operó OHL con Peña, Eruviel y Del Mazo, dice Díez” en Sinembargomx, 16 de marzo de 2019 Disponible en: <https://www.sinembargo.mx/16-03-2019/3550781>
- Globo. 21 de marzo de 2019. *Temer es el segundo expresidente de Brasil detenido por delito común; Lula fue el primero*. Disponible en <http://glo.bo/3xooERB>
- Guerra, Angel. *Cuba: la derrota del golpe blando*. En el periódico La Jornada / Opinión, 14/7/2022, disponible en: <https://www.jornada.com.mx/2022/07/14/opinion/022a1mun>
- Harari, Ianina (2006). La dictadura de la productividad. El antes y el después del golpe en la industria automotriz en El Aromo, no. 30, Razón y revolución. <https://razonyrevolucion.org/la-dictadura-de-la-productividad-el-antes-y-el-despues-del-golpe-en-la-industria-automotriz/>
- Jozami, Eduardo (1986). “Lo interno de la deuda externa. El caso argentino” en Nueva Sociedad, no. 85, septiembre-octubre de 1986, pps. 39-46. Recuperado el 25 de julio de 2020, de: https://static.nuso.org/media/articles/downloads/1425_1.pdf
- Leal B, Francisco. (2003). “La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en América del Sur” en Revista de Estudios Sociales (En línea) 15 de junio de 2003. Recuperado en <https://journals.openedition.org/revestudsoc/26088?lang=fr>
- Monedero, Juan Carlos (2011). “*Democracia y Estado en América Latina: por una imprudente reinención de la política*”, en Documentos de Política. (Madrid: Instituto Complutense de Estudios Internacionales) N° 1
- Ocando C. (2013). “Siemens y la vía oscura de ganar negocios” en Univisión Noticias. 31 de enero de 2013.

- Disponible en: <https://www.univision.com/noticias/univision-investiga/siemens-y-la-via-oscura-de-ganar-negocios>
- Olivet, Müller y Ghiotto (2019) *Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra estados de América Latina y el Caribe en ISDS en números*, Transnational Institute. https://www.tni.org/files/publication-downloads/isds_en_numerosesapril2019_-final.pdf
- Olmos, Raúl (2020). El saqueo corporativo. México: Penguin Random House.
- Pérez, Ana (2011). “México, paraíso de trasnacionales del soborno” en Contralínea, 12 de octubre de 2011. Disponible en: <https://contralinea.com.mx/capitales/mexico-paraíso-de-trasnacionales-del-soborno/>
- Prensa Latina (2019). La iniciativa Mérida, ineficiente y chorreando sangre en Contralínea.com.mx, 20 de mayo de 2019. Disponible en: <https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/05/20/la-iniciativa-merida-ineficiente-y-chorreando-sangre/>
- Ramiro, Pedro y González, E. *Las empresas transnacionales en la arquitectura de la impunidad: poder, corrupción y derechos humanos. PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global*, Número 135, 2016, pp. 39-52. Disponible en <http://omal.info/spip.php?article8265>
- Ramírez-Rojas, Juliana. *La intervención de la OEA en Bolivia. Un análisis de casos desde la perspectiva de la no intervención*. Universidad Nacional de Colombia. 30/11/2021, Disponible en: <https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/1113>
- Romero, M. (2019) *La operación Cóndor y la persecución de la izquierda en América Latina* en Revista El Orden Mundial, 11 de agosto de 2019. Disponible en: <https://elordenmundial.com/operacion-condor-izquierda-america-latina/>
- Sáenz, Leandro y Valenciano María. El golpe de Estado en Honduras, 2009: Un caso para el estudio de la mediación internacional. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, vol. 45, pp. 133-149, 2019. Universidad de Costa Rica. Disponible en <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15264294006>
- Sánchez A. (2019). *Detrás del golpe: la industrialización del litio en Bolivia*. Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos políticos. Diciembre de 2019. Recuperado en: <http://ceap.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/118/2020/01/4.-Bolivia-S%C3%A1nchez.pdf>
- Sánchez, J. A. (15 de julio de 2019). *La extrema derecha intenta dar un “golpe de Estado suave” a AMLO*, en La Jornada online, 15 de julio de 2019. Disponible en: <https://www.jornada.com.mx/2019/07/15/politica/008e1pol>
- TVUNAM (2019). Entrevista a Boaventura de Sousa. Diálogos por la democracia. <https://www.youtube.com/watch?v=Ripf3QFO64E&t=2573s>
- Vitale, Luis (1999). *Historia social comparada de América Latina*, vol. II, Talleres de impresos Atalí, Chile. Disponible en <https://teoriasociologicas.files.wordpress.com/2014/09/92123789-luis-vitale-historia-social-comparada-a-3-del-nacionalismo-al-neoliberalismo-1900-1990.pdf>
- Vollenweider, C. y S. Romano (2017) *Lawfare o la guerra judicial en Argentina y Brasil*. En Celag.org. https://www.celag.org/lawfare-o-la-guerra-judicial-en-argentina-y-brasil/#_ftn1
- Yao, J. (2017). La invasión: entrevista a Noriega sobre Japón (I) en La estrella de Panamá, 3 de abril de 2017 en: <https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/170403/i-japon-noriega-invasion-entrevista>